



Agua para Tarragona

El Gobierno de Aragón ha autorizado, con unos requisitos que difícilmente cumplirá Madrid, un trasvase. Se trata de una transferencia irrisoria que, sin embargo, abre de nuevo la espita del enfrentamiento con el Levante y deja a la DGA en una situación muy complicada para el futuro

■ LUIS FACI

Hay **trasvase**. El agua, la cuestión más delicada en las relaciones de **Aragón** con las regiones del **Levante** español, vuelve a estar de actualidad —¿alguna vez dejó de estarlo?— estos meses a cuenta de la transferencia de un pequeño caudal (0,6 hectómetros cúbicos)

de agua a cuatro pueblos catalanes situados en su mayor parte fuera de la cuenca del **Ebro**. La coalición **PSOE-PAR**, en una decisión muy delicada, ha decidido dar luz verde a un asunto en el que, por mucho boato que haya rodeado al beneplácito aragonés, da la impresión de que la decisión estaba tomada de antemano en el Gobierno central.

Por fin sabemos para qué sirve

el **Estatuto aragonés**. La norma destinada a definir el marco de la soberanía regional ha tenido su primera aplicación: un informe preceptivo pero no vinculante sin el que, por supuesto, nada habría cambiado, ya que el trasvase se habría llevado a cabo con o sin el pláacet aragonés. Poca cosa en comparación con las exigencias que plantea el **Estatuto catalán**, norma que **Madrid** sí respeta hasta sus últimas consecuencias, como se ha visto con el nuevo modelo de financiación autonómica.

¿Qué ha cambiado respecto a la situación de hace dos años, cuando el Gobierno central ordenó mediante 'decretazo' el minitrasvase a Barcelona? Únicamente las for-

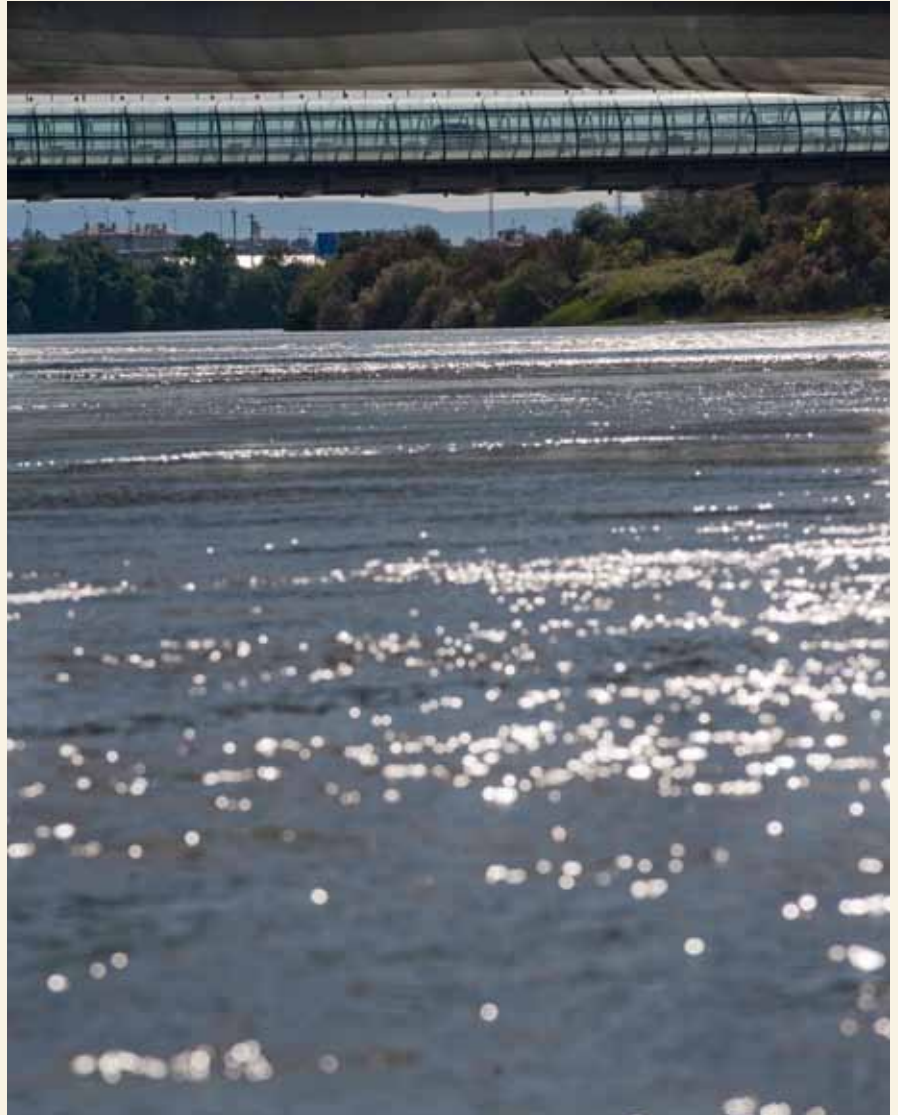
mas. Esta vez, el **Ministerio de Medio Ambiente** ha pedido la opinión de **Aragón** antes de ejecutar sus planes. Como no podía ser de otra manera, superado el escollo del tradicional sentimiento de agravio aragonés, tanto el **PSOE** como el **PAR** han dicho que sí.

Peligroso precedente

La cuestión no iría más allá de no sentar un peligroso precedente. Así lo han advertido los responsables políticos en la **Comunidad Valenciana**, **Murcia** e incluso **Andalucía**, que han blandido inmediatamente la soflama de la insolidaridad para preguntar a gritos por qué **Cataluña** sí, y ellos no. "*Canallesco, manifiestamente insolidario y carente de explicación racional alguna*", era la definición que ofrecía hace dos meses el diario valenciano de **Las Provincias** sobre la situación generada por este trasvase.

Y es que hay que tener presente que incluso los ecologistas leridanos han denunciado que el canal **Segarra-Garrigues**, la macro obra que servirá para llevar el agua a miles de hectáreas semidesérticas de **Lérida** con el objetivo de convertir campos de secano en regadío y que suministrará también agua de boca a las localidades de **Forés**, **Montmaneu**, **Les Piles** y **Santa Coloma del Queralt**, esconde en el fondo un futuro trasvase a **Barcelona** similar al planteado dos años atrás.

La petición de la **Generalitat** catalana afecta a cuatro pueblos situados en las lindes de la cuenca hidrográfica: **Les Piles**, **Forés**, **Montmaneu** y **Santa Coloma de Queralt**. Entre todos, apenas superan los 3.500 habitantes. El caso más curioso es el de **Forés**, cuyo casco urbano está dividido entre la cuenca del **Ebro** y las cuencas internas de **Cataluña**. En este caso, se podría dar la eventual disyuntiva de que, del apenas medio centenar de vecinos que hay, la mitad tendrían derecho a agua del Ebro y el resto, no. En cualquier caso, también hay que destacar las optimistas previsiones urbanísticas



Las aguas del Ebro vuelven, de nuevo, a enfrentar a los gobiernos aragonés y catalán.

Una obra polémica

La propia obra del canal **Segarra-Garrigues**, ideada inicialmente para transformar más de 70.000 hectáreas de secano en regadío en **Lérida** y que será la llave del suministro hasta los cuatro municipios catalanes, ha sido objeto de una gran controversia, hasta el punto de que la **Unión Europea** ha reducido notablemente el aprovechamiento de la infraestructura. De esta forma, los agricultores solo podrán utilizar un 30% del agua concedida por el organismo de cuenca, de modo que al final solo unas 20.000 hectáreas de campo, aproximadamente, cambiarán sus usos. Los sucesivos recortes que ha impuesto **Bruselas** se deben a que el canal atraviesa numerosas zonas de especial protección de aves (**Zepas**), algo que la **Generalitat** ya sabía de antemano.

En total, el canal abarca 84 kilómetros y se surte del embalse de **Rialb**. A mediados del año pasado, la **Comisión Europea** se planteó incluso reclamar judicialmente la paralización de las obras por los posibles daños medioambientales de carácter irreversible que podría causar. Un año y medio antes, el **Tribunal de Justicia de la UE** ya condenó a **España** por la infraestructura. Hay que recordar que, en **Bruselas**, el *lobi* verde tiene tanto poder como el *lobi* de los agricultores aquí.



Javier Velasco.

que hay en dos de las localidades: **Santa Coloma y Montmaneu**.

Reacción aragonesa

La reacción de los dos partidos que gobiernan en **Aragón** a la petición de agua ha sido reveladora. El primero en reaccionar por el consejero de **Presidencia**, el socialista **Javier Velasco**, que antes de valorar si la información aportada por la **Generalitat** catalana justificaba la transferencia agradeció públicamente al **Gobierno central** que pidiese opinión a los aragone-



Alfredo Boné.

ses, algo de agradecer si no fuera porque es, ni más ni menos, lo que exige el **Estatuto**, una norma con rango de ley. Así pues, el **PSOE** dio las gracias a los jefes en Madrid por cumplir con la legalidad.

Cuando se hizo manifiesto que la documentación justificativa que incluyó el Ejecutivo catalán en su petición a la **Confederación Hidrográfica del Ebro** era casi nula, los socialistas aragoneses dieron un leve paso atrás y pidieron conocer en profundidad la propuesta. Una reacción de cara a la opinión pública, ya que no

había duda de que la posibilidad de enfrentamiento de esta formación con el Gobierno central por el trasvase era muy remota.

Más significativo ha sido el devenir de los acontecimientos respecto al **PAR**. Los aragonesistas empezaron cerrándose en banda a la transferencia, con el argumento de que rechazaban cualquier tipo de trasvase más allá de sus características. Poco a poco empezaron a recular. El consejero de **Medio Ambiente**, **Alfredo Boné**, rechazó días más tarde la justificación de la medida y se negó a dar carácter permanente a la transferencia de agua. El vicepresidente **Biel** advirtió del "*efecto perverso*" de la iniciativa porque reactivaría las "*ansias*" de valencianos y murcianos. Al final, los aragonesistas dieron el visto bueno; eso sí, con una lista de exigencias y contraprestaciones que, en su mayor parte, el Gobierno central probablemente obvie.

El propio **Biel** fue el encargado de dar a conocer las líneas maestras del informe favorable aragonés al trasvase. Documento que no incluyó el dictamen del **Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón**: el argumento oficial fue que este órgano, regenerado con la **Ley de Ordenación del Territorio** del año pasado, aún no se ha constituido; en el trasfondo aparece el hecho de que el órgano homónimo pero anterior a la mencionada ley —que es el que ha emitido finalmente el dictamen— está en manos de la Consejería de **Obras Públicas**, del **PSOE**, mientras que el futuro órgano pasará al control de la Consejería de **Política Territorial**, que dirige el aragonesista **Rogelio Silva**. El acuerdo del Ejecutivo aragonés ponía como condiciones que se justificara la transferencia, que fuera "*temporal y transitoria*", que la obra fuera reversible y que el Gobierno central ofreciera la "*misma sensibilidad*" hacia municipios aragoneses con dificultades de suministro y declarara "*de interés general*" los proyectos para mejorar el abastecimiento a estas localidades (un total de 72, de las

EL PRECEDENTE

Las lluvias arreglaron el embrollo

En abril de 2008, apenas recuperados de las recientes elecciones generales, surgió un pequeño maremoto que solo remedió la lluvia. El **Gobierno central** mostró su intención de construir de urgencia una canalización para llevar agua al entorno de **Barcelona**, afectado entonces por una profunda sequía, y desató la caja de los truenos en **Aragón**. La obra estaba planificada desde hacía meses, pero la cercanía de los comicios provocó el retraso en su aplicación. También entonces se utilizó el argumento de la necesidad, de que el uso era para agua de boca, para justificar la decisión.

En esa tesitura, el **PSOE-Aragón** y el **PAR** se negaron de plano a una eventual cesión de derechos, aunque al final tragarón: tanto en las **Cortes** como en el **Congreso** (en este caso, los diputados socialistas aragoneses) votaron a favor de la medida. Su falsa oposición no fue a más debido a que las inesperadas lluvias primaverales hicieron innecesario el abastecimiento a **Barcelona**, con lo que la opción se diluyó.



Al final, el agua del Ebro, en la imagen a su paso por Zaragoza, llegará a las cuatro poblaciones leridanas.

Foto: Víctor Lax

tres provincias). Si quedaban dudas respecto al cumplimiento por parte del Ejecutivo de **Rodríguez Zapatero** de estas exigencias, desde el Gobierno central ya se dejó claro posteriormente que la declaración de interés general, que traería como consecuencia que la financiación provendría de **Madrid** y no de **Aragón**, resultaba complicada.

Al final, es poco probable que el **Ministerio de Medio Ambiente** tenga en cuenta alguno de los requisitos planteados por **Aragón**.

Respecto al **Gobierno catalán**, ha transmitido la impresión en todo este asunto, que al final se ha entremezclado con la inoportuna candidatura de **Barcelona** a las **Olimpiadas de Invierno de 2022**, de que si ha pasado por el aro de la consulta a **Aragón** ha sido por la petición de **Madrid**. Así, resulta reveladora la torpeza del consejero catalán de **Medio Ambiente**, **Francesc Baltasar**, que dio por hecho a primeros de diciembre que el Ministerio ya había autorizado el trasvase cuando en **Aragón** aún estaban dándole vueltas a qué órganos participarían en el informe. El **Gobierno**



Francesc Baltasar.

central tuvo que desmentir a la **Generalitat**, para recalcar que el permiso aún estaba en tramitación. Las formas, una vez más, son las formas.

Llama la atención, por otro lado, el momento elegido para solicitar al **Gobierno central** la transferencia a los cuatro pueblos. No en vano, los trabajos en el canal **Segarra-Garrigues** comenzaron en 2002 y está previsto que

acaben en pocos años. Se trata de un proyecto faraónico, que aglutina una inversión total de unos 1.600 millones de euros y que cuyo aprovechamiento solo estaba en principio pensado para la agricultura. Lógicamente, con la obra en vías de concluir, resulta muy improbable que la **Generalitat** catalana haya caído tan tarde en la cuenta de que una ínfima porción del agua que transporta el canal podría destinarse a agua de boca para los cuatro núcleos urbanos, que llevan toda la vida abasteciéndose de pozos en gran medida insalubres.

En medio del debate generado por el trasvase, no faltaron voces fuera de tono. Y no solo desde el **Levante**, algo previsible, sino también desde **Madrid**. En concreto, del ex presidente madrileño, **Joaquín Leguina**, que en plena la promoción de su novela sacó tiempo para atacar en su blog a **Marcelino Iglesias** por dar su permiso a la transferencia de agua: "Pero es que el presidente de la Comunidad aragonesa es el dueño del Ebro?", se preguntó el ex dirigente socialista. "El Ebro no es de los aragoneses", apostilló en su alegato trasvasista. ■